



Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 1076/2015/14/CA4

**Reg. Interno N° 353/2020**

**LEGAJO DE APELACIÓN DE CORDOBA SEGUNDO  
PANTALEON, SUELDO MARIA LAURA, CORDOBA ROCIO  
MACARENA, PELLADO ARIEL SEBATIAN Y OTORS EN  
AUTOS: “CORDOBA, SEGUNDO PANTALEON Y OTROS  
S/INFRACCION ART. 303”.**

CPE 1076/2015/14/CA4, ORDEN N° 32.823 – J.N.P.E. N° 2,  
Secretaría N° 3.

///nos Aires, 26 de octubre de 2020.

**VISTOS:**

Los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Segundo Pantaleón CORDOBA y de Hugo Mariano RODRIGUEZ a fs. 4171/4177 vta. y a fs. 4189/4192 de los autos principales (fs. 123/129 vta. y 136/144 de este incidente), respectivamente, contra los puntos resolutivos I, II, IV y V de la resolución de fs. 4114/4155 vta. del mismo expediente (fs. 76/113 del presente) en cuanto por aquéllos el juzgado “*a quo*” dictó el auto de procesamiento, sin prisión preventiva, de los nombrados y dispuso un embargo sobre los bienes de aquellos hasta cubrir la suma de \$ 900.000.000 y \$ 200.000.000, respectivamente.

El recurso de apelación interpuesto por el fiscal de la instancia anterior a fs. 4163/4170 de los autos principales (fs. 115/122 del presente) contra los puntos resolutivos VIII y X de la citada resolución, en cuanto por aquellos se dispuso el sobreseimiento de Ariel Sebastián PELLADO y Marcelo Fabián PELLADO, respectivamente.



El recurso de apelación interpuesto por el representante de la Unidad de Información Financiera a fs. 4178/4183 de los autos principales (fs. 130/135 del presente) contra los puntos resolutivos VIII, X, XI y XII de la citada resolución, en cuanto por aquellos se dispuso el sobreseimiento de Ariel Sebastián PELLADO, de Marcelo Fabián PELLADO, de Rocío Macarena CORDOBA y de María Laura SUELDO, respectivamente.

Los memoriales de fs. 161/164, 165/181, 182/189, 190/196, 197/199 vta. del presente legajo, mediante los cuales la defensa oficial de Rocío Macarena CORDOBA, la representante de la Unidad de Información Financiera, la defensa de Hugo Mariano RODRIGUEZ, la defensa oficial Segundo Pantaleon CORDOBA y el señor Fiscal General que actúa ante esta Cámara de Apelaciones informaron, respectivamente, en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N.

### **Y CONSIDERANDO:**

1º) Que, en los autos principales a los cuales corresponde este incidente, se investiga a *“...un grupo de personas, entre las cuales se encuentran, Segundo Pantaleón CORDOBA, María Laura SUELDO, Rocío Macarena CORDOBA, Hugo Mariano RODRÍGUEZ, Miguel Ángel PETRIZAN, Ariel Sebastián PELLADO y Marcelo Fernando PELLADO, quienes habrían integrado una estructura mediante la cual se habrían adquirido, administrado y vendido bienes, como así también transferido y canalizado importantes sumas de dinero hacia el extranjero, todos ellos provenientes de un origen espurio, pues habrían sido el producto de conductas ilícitas, en el orden patrimonial, en las que habría intervenido Segundo Pantaleón CORDOBA, constitutivas, entre otros, de los delitos de estafa, defraudación por administración fraudulenta, estafa procesal, falsificación de documento privado y prevaricato (de conformidad con lo imputado al nombrado en el*





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 1076/2015/14/CA4

*marco de las causas N° 17.204/2010; 14.162./2011, 73.770/2013 y 39.847/2009, en trámite actualmente ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29)...” (confr. fs. 78 vta. del presente incidente).*

2º) Que por la resolución que obra en copia a fs. 76/113 de este incidente, el señor juez a cargo del juzgado “*a quo*” dictó, por un lado, el auto de procesamiento, sin prisión preventiva, de Segundo Pantaleon CORDOBA y de Hugo Mariano RODRIGUEZ por considerarlos, *prima facie*, autor y partícipe necesario, respectivamente, del delito previsto por el artículo 303, inc. 1º, del Código Penal, con relación a algunos de los hechos por los que fueron indagados, más precisamente los indicados por los apartados 1 a 7 del considerando 10º de la citada resolución. Por otro lado, dispuso los sobreseimientos de Ariel Sebastián PELLADO, de Marcelo Fabián PELLADO, de Rocío Macarena CORDOBA y de María Laura SUELDO, con relación a todos los hechos por los que fueron indagados, indicados por el considerando 10º de la resolución apelada.

Para resolver en ese sentido y respecto de Segundo Pantaleon CORDOBA y de Hugo Mariano RODRIGUEZ, el señor juez “*a quo*” sostuvo que: “...*de los elementos reunidos se ha podido conocer como Segundo Pantaleón CORDOBA habría conformado una serie de sociedades comerciales en el extranjero (NASATE RESOURCES INC., AMARRAS DEL SOL LLC y EL CAMPANARIO LLC, por lo menos las aquí conocidas y cuestionadas), entre los años 2009 y 2010, en forma paralela habría realizado la apertura de diversas cuentas bancarias en la República Oriental del Uruguay, como así también habría formalizado diferentes actos de compraventa de inmuebles en el referido país vecino y en los Estados Unidos de América, todo ello con dinero que provendría de ganancias espurias, a los fines de capitalizarlo, administrarlo y,*



posteriormente, convertir aquéllos en dinero con apariencia de licitud.

Asimismo, como fuera puesta de manifiesta el antes nombrado (Segundo CÓRDOBA) no habría actuado en soledad para la comisión de aquellas acciones, sino que se habría valido del auxilio o la ayuda de varias personas, entre ellas, en lo que aquí interesa, Hugo Mariano RODRÍGUEZ.

En ese sentido, RODRÍGUEZ habría ayudado a CÓRDOBA, prestándose para el cambio de conformación de una de las sociedades off shore (puntualmente NASATE RESOURCES INC.), mientras que respecto de otra de ellas habría actuado como apoderado en la venta de una propiedad en Miami (EL CAMPANARIO LLC) y, además, habría registrado ante uno de los bancos con sede en Uruguay la apertura de una de las cuentas aquí cuestionadas, como directivo junto a CÓRDOBA.

Los activos presumiblemente de origen espurios con los cuales Segundo CÓRDOBA habría realizado las conductas imputadas, a criterio de este juzgado, habrían provenido, por ejemplo, de las diferentes maniobras fraudulentas que, en la actualidad, son materia de evaluación por parte del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29, no pudiéndose descartar, a esta altura de la investigación, la existencia de otras conductas ilícitas con las cuales el encausado haya obtenido dinero espurio...” (la transcripción es copia textual de fs. 100 vta./101 vta. de este incidente).

Asimismo, respecto de Ariel Sebastián PELLADO y de Marcelo Fabián PELLADO, el señor juez “a quo” sostuvo que: “... habiéndose descartado que la intervención de Ariel PELLADO y Marcelo PELLADO podría enmarcarse dentro del tipo penal en estudio, dado que los fondos que fueron transferidos por los nombrados no habrían provenido de un ilícito, y que, a la fecha, se encuentra agotada la labor de investigación a sus respectivos, este juzgado se encuentra en condiciones de expedirse, de conformidad





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 1076/2015/14/CA4

*con las previsiones del artículo 334 y ccdtes. del C.P.P.N...” (la transcripción es copia textual de fs. 107 vta. de este incidente).*

Finalmente, respecto de Rocío Macarena CORDOBA y de María Laura SUELDO, el señor juez “a quo” sostuvo que: “...es posible inferir que María SUELDO no habría realizado más que aquellos actos que su ex marido le habría indicado, en el marco de la mentada relación matrimonial que, en ese entonces mantenían, siendo ajena a las maniobras espurias que aquél perpetrara para obtener los activos, es decir, habría participado desconociendo los pormenores y fines espurios de esa intervención que tenía como objetivo dar apariencia lícita a las ganancias obtenidas ilegítimamente por Segundo Pantaleón CÓRDOBA.

Máxime si se tiene en cuenta que quien habría sido el beneficiario final de todas las operaciones no habría sido otro que Segundo CÓRDOBA.

En efecto, esa circunstancia junto a los elementos reunidos lleva a la conclusión que se debe adoptar respecto de María Laura SUELDO el temperamento procesal previsto por el art. 336 del C.P.P.N.

En el mismo sentido, es dable indicar que respecto a la situación procesal de Rocío Macarena CÓRDOBA, conforme las diferentes constancias incorporadas en el expediente, se encuentra vinculada a las maniobras que constituyen el objeto procesal, en virtud de los elementos aportados por las autoridades uruguayas, de los cuales se desprende su inclusión como integrante de una sociedad comercial y como cotitular de una cuenta bancaria en ese país...

Ahora bien, y como se expresara respecto de María Laura SUELDO este juzgado entiende que en el caso de Rocío CÓRDOBA, nos encontramos ante la acción realizada y/o direccionada, por un tercero que ejercía cierto poder sobre una persona, sobre quien ostentaba la patria potestad, es decir,



*claramente Segundo Pantaleón CÓRDOBA, progenitor de la nombrada se habría válido de aquel poder para la realización de los mentados actos...*

*Por lo tanto, y tal como se concluyera respecto de María SUELDO, en este caso, no se vislumbran elementos o indicios incriminantes que lleven a inferir que Rocío CÓRDOBA haya actuado con el conocimiento requerido en las acciones que, en forma nominativa, su propio padre la habría hecho participar...” (la transcripción es copia textual de fs. 108/109 vta. de este incidente).*

3º) Que, por el recurso de apelación que luce agregado en copia a fs. 115/122 de este expediente, el fiscal de la instancia anterior se agravió de la decisión adoptada por el señor juez “a quo” con relación a los sobreseimientos dispuestos respecto de Ariel Sebastián PELLADO y de Marcelo Fabián PELLADO, exclusivamente con relación a los hechos indicados por los apartados 1, 2, 3, 9 y 10 del considerando 10º de la resolución apelada, por entender que la decisión recurrida resulta prematura.

En ese sentido, indicó que “...corresponde determinar el origen lícito de los fondos transferidos por aquéllos a las cuentas bancarias registradas por Segundo Pantaleón CÓRDOBA, a través de las cuentas corrientes [de] las empresas “KILCON INTERNATIONAL S.A.” y “CEDERLAKE S.A.”...”, argumentando que esos fondos “...no solo no fueron declarados a las autoridades uruguayas, sino que tampoco fueron declarados al organismo fiscal de nuestro país, [por lo que] no puede descartarse que por lo menos parte de aquellos bienes podrían provenir de un ilícito, y ese ilícito sería justamente la presunta evasión tributaria,” (se prescinde del resaltado).

Por lo tanto, el fiscal de grado, considera que debería “...expedirse la AFIP-DGI en cuanto a la posible maniobra de evasión de tributos [en] que podrían verse inmersos los imputados...en relación a la presunta utilización de dos sociedades radicadas en la





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 1076/2015/14/CA4

*República Oriental del Uruguay para la administración y capitalización del producido de su actividad comercial -en principio lícita- en este país, desviando esos recursos hacia diversas cuentas bancarias abiertas en el extranjero, ocultando y disociando de esa forma su patrimonio ante el fisco nacional.”.*

Por su parte, el Fiscal General que actúa ante esta Cámara, mejoró los fundamentos esgrimidos por el de primera instancia a los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad (confr. fs. 197/199 vta. de este incidente).

4º) Que, por el recurso de apelación que luce agregado en copia a fs. 123/129 vta. de este expediente, la defensa oficial de Segundo Pantaleón CORDOBA se agravió de la decisión adoptada por el señor juez “a quo” por considerar que “...no existen elementos que permitan achacarle a mi asistido el ilícito que se le endilgó.”.

Asimismo, se agravió aquella defensa por considerar que “...no corresponde la aplicación de la actual redacción prevista por el art. 303 del código adjetivo, sino la anterior redacción del otrora artículo 278, inciso 1º, punto “b” (según el texto de la ley 25.246).”.

Por otra parte, entiende que el temperamento adoptado por el juez en cuanto a que no es necesario probar fehacientemente el delito previo al delito de lavado de activos, afecta el principio de inocencia del que goza su defendido.

También se agravia por considerar que el señor juez “a quo” no ha valorado prueba que determinaría el origen lícito de los fondos en cuestión.

Finalmente, se agravia por el monto del embargo “...por cuanto no se han dado razones válidas que permitan arribar a dicha suma.”.



5º) Que, por el recurso de apelación que luce agregado en copia a fs. 130/135 vta. de este expediente, el representante de la Unidad de Información Financiera se agravió de la decisión adoptada por el señor juez “a quo”, con relación a los sobreseimientos dispuestos respecto de Ariel Sebastián PELLADO y de Marcelo Fabián PELLADO, exclusivamente con relación a los hechos indicados por los apartados 1, 2, 3, 9 y 10 del considerando 10º de la resolución apelada, por considerar que “...los sobreseimientos dictados devienen prematuros, no resultando de las constancias de autos elementos certeros que justifiquen el dictado de la resolución adoptada.”.

Argumenta, en ese sentido que “...no existe elemento que aporte certeza respecto a la manera en la que ha ingresado el dinero a la República Orienta del Uruguay y su origen...” y que “...la presunta licitud del dinero transferido no obsta a una posible participación en el entramado de las maniobras de lavado de activos, contribuyendo los imputados a la consolidación de la etapa conocida como “decantación”.”.

Por otra parte, si bien aquella parte interpuso recurso de apelación contra el sobreseimiento dictado respecto de Rocío Macarena CORDOBA y de María Laura SUELDO, debe expresarse que al momento de presentar el memorial sustitutivo de la audiencia prevista por el art. 454 del C.P.P.N., la representante de la Unidad de Información Financiera ante esta Cámara, solamente solicitó “...que [se] revoque[n] los puntos VIII y X de la resolución de fecha 26/09/2019, **confirmándose los restantes...**” (el resaltado es de la presente) y solo expuso agravios respecto de Ariel Sebastián PELLADO y de Marcelo Fabián PELLADO, por lo que, conforme lo previsto por la norma legal citada precedentemente, el recurso de apelación interpuesto contra los puntos XI y XII de la resolución apelada, referidos a los sobreseimientos dictados respecto de las nombradas en primer término, ha quedado desistido.







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 1076/2015/14/CA4

6°) Que, por el recurso de apelación que luce agregado en copia a fs. 136/144 de este expediente, la defensa de Hugo Mariano RODRIGUEZ se agravió de la decisión adoptada por el señor juez “*a quo*” por considerar que la misma carece de sustento probatorio que la respalde.

También se agravia del monto del embargo por entender que “*...resulta a todas luces excesivo si se tiene en cuenta la poca participación activa que ha tenido Rodríguez...*”.

7°) Que, conforme se expondrá por la presente, por ninguno de los argumentos invocados por los recursos de apelación interpuestos en favor de Segundo Pantaleón CORDOBA y de Hugo Mariano RODRIGUEZ, ni por los desarrollados en la ocasión prevista por el art. 454 del C.P.P.N. (confr. fs. 123/129 vta., 136/144, 161/164 y 182/189 de este incidente), se han desvirtuado los fundamentos expresados por la resolución recurrida en lo referente a los autos de procesamiento dispuestos, principalmente los expuestos en los considerandos 10° a 32° de aquélla, los cuales resultan acordes con las constancias que actualmente se encuentran agregadas al legajo principal.

Corresponde comenzar por señalar que, en lo que concierne a los hechos investigados en autos, por los recursos de apelación señalados precedentemente no se encuentra controvertida la materialidad de las circunstancias que el juzgado “*a quo*” tuvo en cuenta para concluir provisionalmente que, en el caso de Segundo Pantaleón CORDOBA y de Hugo Mariano RODRIGUEZ, habrían participado en las presuntas maniobras de lavado de activos que se les atribuyen.

Se observa en cambio que por los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los nombrados se invocaron agravios con relación a lo establecido por el juzgado “*a quo*” en torno de la



presunta intervención culpable de Segundo Pantaleón CORDOBA y de Hugo Mariano RODRIGUEZ en los hechos ilícitos mencionados por el considerando 10°), apartados 1 a 7, de la resolución apelada, por los cuales se sostiene la ausencia de elementos de cargo que permitan vincular a los nombrados con la comisión de tales hechos.

Sin embargo, contrariamente a lo argumentado por los apelantes, se advierte que los elementos de prueba incorporados actualmente a los autos principales constituyen un cuadro probatorio suficiente para sustentar, con el alcance exigido por el art. 306 del C.P.P.N., al menos por el momento, la estimación provisoria efectuada por la resolución apelada con relación a la participación culpable de Segundo Pantaleón CORDOBA y de Hugo Mariano RODRIGUEZ en los hechos presuntamente ilícitos que se les atribuyen.

8°) Que, los cuestionamientos efectuados por las defensas de Segundo Pantaleón CORDOBA y de Hugo Mariano RODRIGUEZ sobre la entidad convictiva de los elementos de prueba incorporados a la causa principal parten de un análisis aislado de cada elemento, sin apreciar a aquéllos en conjunto.

En ese sentido, con relación a la intervención de los nombrados en el delito que se les atribuye por la resolución recurrida, por la cual se dispuso auto de procesamiento, sin prisión preventiva, respecto de los nombrados, lo invocado por las defensas con relación a la ausencia de elementos de convicción suficientes para considerar acreditada la intervención culpable de aquéllos en los delitos señalados, no puede prosperar.

Aquéel análisis parcial no resulta admisible, pues la eficacia de las presunciones que podrían derivar de cada elemento de prueba depende de la valoración conjunta que se efectúe de aquéllos teniendo en cuenta la diversidad, la correlación y la concordancia de los mismos, pero no de un tratamiento particular y aislado, toda vez que, por su misma naturaleza, cada uno de los indicios no puede llegar





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 1076/2015/14/CA4

a fundar aisladamente ningún juicio de convicción, el cual deriva de la pluralidad y concordancia de aquéllos (confr. Fallos 300:928, CPE 1561/2018/67/105/CA55, res. del 08/10/19, Reg. Interno N° 684/2019, CPE 1913/2019/5/CA1, res. del 18/02/20, Reg. Interno N° 46/2020 y CPE 9881/2016/71/CA27, res. del 18/3/20, Reg. Interno N° 102/2020 de esta Sala “A”).

En efecto, como se ha establecido por pronunciamientos anteriores, *“...la totalidad de los elementos probatorios arrimados al expediente debe ser objeto de una valoración articulada, contextual y conjunta dentro del plexo probatorio, el cual, evaluado en un acto único y con ajuste a la sana crítica racional, posibilita la obtención de una acabada constatación de los hechos investigados. El mero análisis parcializado de los elementos de prueba incorporados al proceso impide la comprensión global del hecho de que se trata...”* (confr. CPE 1561/2018/67/105/CA55, res. del 8/10/19, Reg. Interno N° 684/2019 y CPE 1913/2019/5/CA1, res. del 18/02/20, Reg. Interno N° 46/2020 de esta Sala “A”, entre otros).

9º) Que, conforme se encuentra acreditado en autos y no ha sido controvertido por los apelantes, el imputado Segundo Pantaleón CORDOBA, entre los años 2009 y 2011, habría desplegado una activada económica significativa, valiéndose en muchos casos de sociedades *off shore* creadas al efecto. Dichas sociedades serian, en principio, NASATE RESOURCES INC constituida en la República de Panamá, por intermedio de la cual CORDOBA habría realizado la apertura de la cuenta N° 3090723 en el HSBC Bank Uruguay, de la cual el nombrado revestía la calidad de director/presidente y el coimputado Hugo Mariano RODRIGUEZ ostentaba el cargo de director/secretario de la misma; AMARRAS DEL SOL LLC constituida en la ciudad de Miami, estado de Florida de los Estados Unidos de América, en donde CORDOBA habría firmado la



registración de la misma, en carácter de “*manager*”, en el mes de septiembre de 2009; y EL CAMPANARIO LLC constituida también en la misma ciudad que la anterior, en donde CORDOBA también ostentaba la función de “*manager*” y, en dicho carácter, habría firmado la registración de la misma el 12 de mayo de 2009.

También se encuentra acreditado en autos que Segundo Pantaleón CORDOBA, habría operado a título personal en distintas cuentas abiertas en bancos de la República Oriental del Uruguay, principalmente en el HSBC Bank de ese país, destacándose los movimientos bancarios efectuados en las cuentas N° 206672 y 3070264. Asimismo dicha entidad bancaria habría reportado la cuenta N° 3070646 a nombre de Hugo Mariano RODRIGUEZ. (confr. documentación remitida por la justicia de la República Oriental del Uruguay al momento de contestar el Exhorto Internacional N° 474-71/16 la cual se encuentra reservada por Secretaría)

10°) Que, asimismo, deben señalarse las importantes operaciones de compraventas de inmuebles situados en la República Oriental del Uruguay y en los Estados Unidos de América, las que fueron detalladas por el “*a quo*” en los considerandos 19° y 20° a los que se remite con el fin de evitar reiteraciones innecesarias, en las cuales Segundo Pantaleón CORDOBA y Hugo Mariano RODRIGUEZ habrían participado, utilizando en uno de esos casos la sociedad EL CAMPANARIO LLC constituida en los Estados Unidos de América por el nombrado CORDOBA de la que participó el nombrado RODRIGUEZ en calidad de apoderado con el fin de realizar la compraventa de un inmueble sito en dicho país, el 25 de julio de 2011, por un monto de u\$s 650.000.

Respecto a dicha operación, debe destacarse lo manifestado por Hugo Mariano RODRIGUEZ al momento de realizar una presentación en los términos de los arts. 73 y 279 del CPPN, por la que expresó que: “...En el año 2011 coincidimos en Miami, y me pidió que pasáramos por un Estudio Jurídico, donde lo atendió un





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 1076/2015/14/CA4

*profesional cubano/americano, que hablaba fluidamente los dos idiomas, de apellido JULIÁ, que hizo la tramitación para que yo firmara en nombre de “EL CAMPANARIO LLC” la venta de un departamento sito en la calle COLLINS 9559, de Miami, propiedad que pertenecía a la sociedad pero que en definitiva era de Córdoba, operación en la cual éste último me facultó para transmitir la propiedad en favor de IVAN DE BASTO GOUVEIA, sobrino de Córdoba, operación en la que no hubo dinero FISICO alguno, nada pagamos ni nada cobramos, ya que este último, como yo, también participaba en forma nominativa.” (confr. fs. 4098 vta. de los autos principales).*

11º) Que, por otra parte, debe señalarse que de las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto a los Bienes Personales de los años 2009 a 2015 aportadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, las que se encuentran reservadas por Secretaría, surge que tanto Segundo Pantaleón CORDOBA como Hugo Mariano RODRIGUEZ habrían omitido declarar ante el organismo recaudador los bienes que los mismos habrían tenido en el exterior así como también las participaciones en las sociedades señaladas por los considerandos que anteceden.

Lo señalado precedentemente tampoco ha sido controvertido por los recurrentes.

12º) Que, en oportunidad de ser citados ante el juzgado de la instancia previa, con el fin de recibirles la declaración indagatoria, tanto Segundo Pantaleón CORDOBA como Hugo Mariano RODRIGUEZ se negaron a declarar.

Posteriormente, el nombrado en último término presentó un escrito en los términos de los arts. 73 y 279 del CPPN en donde



manifestó, en lo que interesa a la presente, que: “[Segundo Pantaleón CORDOBA]...me pidió –y yo acepté- prestar mi nombre para formar parte de algunas sociedades, titulares de inmuebles que él había adquirido con anterioridad; pero sin participación económica de ninguna naturaleza.

*Debo aclarar que jamás participé ni tenía conocimiento ni de los inmuebles ni de las sociedades hasta el día que me pide ayuda.*

*Mi participación en estas empresas fue, en algunos casos como apoderado y en otras como secretario o director, pero en ninguna de las sociedades yo tenía poder de decisión.*

*En cuanto a los movimientos que surgen de los cuadros y gráficos que me exhibieron, la única operación de la que puedo suponer una explicación –aunque no lo sé con certeza- es la de los giros efectuados con fecha 17 de noviembre del año 2011 -que tampoco fueron ordenados por mi persona- y que habrían sido enviados al abogado de apellido JULIÁ antes referido, creo yo que en concepto de honorarios, ya que el nombrado era abogado con residencia en Miami, y fue él quien se encargó de tramitar la transferencia del inmueble de “EL CAMPANARIO LLC”.*

*Insisto, yo sólo prestaba mi firma para un traspaso entre sociedades del mismo grupo. Esto no se trató de una operación de compraventa, por lo que no hubo movimiento de dinero “físico”.*

*Me llamaron seguidamente a firmar, y así concluyó toda mi participación en estas operatorias, prometiéndome Córdoba que me eliminaría de cualquier sociedad, ya que yo nunca tuve interés en estas negociaciones internacionales.*

*En cuanto a la sociedad NASATE RESOURCES, era una empresa panameña de la que el nombrado Córdoba era dueño, pero que inicialmente estaba a nombre de unas personas de nacionalidad panameña.*

*El día 3 de diciembre del año 2010 el nombrado Córdoba decide cambiar los miembros del directorio, a partir de lo*





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 1076/2015/14/CA4

*cual él –Córdoba- como presidente y su hija como tesorera comienzan a tener el manejo de la compañía, a través de un poder general extendido SOLO EN FAVOR DE ELLOS DOS, mandato que incluía naturalmente la libre disposición de los bienes de la empresa.” (confr. fs. 4097/4100 vta. de los autos principales).*

13°) Que, sumado a lo expuesto, debe recordarse que Segundo Pantaleón CORDOBA enfrenta numerosos procesos ante la justicia conforme se ha detallado en la resolución apelada (confr. considerando 25°). En ese sentido debe señalarse que el nombrado fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, por el delito de lavado de activos, por el hecho consistente en haber intentado extraer del país la suma de u\$s 800.000 en ocasión de un viaje con destino a la República Oriental del Uruguay.

También deben destacarse los numerosos expedientes en donde Segundo Pantaleón CORDOBA se encuentra sometido a proceso, en algunos casos en instancia de juicio oral y público y en otros casos con autos de procesamiento dictados respecto del nombrado, ante la Justicia Criminal Ordinaria de la Capital Federal, referidos a delitos de carácter patrimonial, los cuales fueron debidamente señalados por el “a quo” en la resolución recurrida por el considerando al que se hizo referencia precedentemente.

14°) Ahora bien, por todos los elementos recopilados en la presente pesquisa a los que se hizo referencia por los considerandos que anteceden y los cuales fueron detallados minuciosamente por el señor juez “a quo” en la resolución recurrida, se advierte que los mismos, evaluados en forma conjunta, resultan indicativos de una presunta actividad delictiva por parte de los imputados Segundo Pantaleón CORDOBA y Hugo Mariano RODRIGUEZ, la que en principio podría constituir el delito que se les imputa en autos.



En ese sentido, debe ponderarse la importante actividad económica desplegada por el nombrado CORDOBA durante el período de tiempo que se investiga, con la participación de RODRIGUEZ, la que se advierte que habría sido deliberadamente ocultada al Fisco Nacional. Ese proceder sustenta la hipótesis delictiva que se propone en autos en tanto no se han dado razones que puedan controvertir las pruebas de cargo recopiladas en las actuaciones principales.

En ese orden de ideas debe indicarse que Segundo Pantaleón CORDOBA se negó a declarar en la oportunidad de comparecer ante el juez de la instancia anterior a fin de prestar la declaración indagatoria cuando podría haber brindado algún tipo de explicación que contribuya a esclarecer los hechos que se le imputan.

Por otra parte, la versión exculpatoria de Hugo Mariano RODRIGUEZ, basada en la supuesta ajenidad en las maniobras en las que intervino y en que solo habría participado en las sociedades y operaciones de compraventa solamente en carácter nominativo, sin haber percibido ningún rédito económico, no puede tener recepción favorable, pues no resulta un comportamiento acorde con las reglas de la lógica, de la experiencia y del sentido común que el nombrado haya accedido a formar parte de las sociedades NASATE RESOURCES INC y EL CAMPANARIO LLC en las calidades ya señaladas por los considerandos que anteceden y que haya intervenido, como apoderado de una de aquéllas, en una importante operación en el exterior con el conocimiento de que la misma se habría tratado de una compraventa simulada por el coimputado Segundo Pantaleón CORDOBA, según sus propios dichos, sin siquiera haberse cuestionado su conducta o, al menos, haberle resultado llamativo el hecho de que se le se haya solicitado intervención en un accionar que no podía dejar de apreciar como posiblemente ilícito, circunstancia que no lo motivó a no seguir adelante con la actividad propuesta, máxime si se tiene en cuenta la condición y larga trayectoria de Hugo Mariano RODRIGUEZ como profesional del derecho.







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 1076/2015/14/CA4

**15°)** Que, sumado a lo expuesto por los considerando que anteceden y contrariamente a lo propuesto por la defensa de Segundo Pantaleón CORDOBA, tampoco resulta verosímil que el dinero de que se trata haya sido producto de la actividad lícita que desarrollaba el nombrado como abogado, en tanto no se encuentra esclarecido cómo es que Segundo Pantaleón CORDOBA logró depositar los activos de que se trata en cuentas bancarias radicadas en el exterior. Esa circunstancia, sumada al hecho de que CORDOBA ya había sido condenado por intentar extraer del país dinero en efectivo de origen espurio en la oportunidad de un viaje al mismo país en donde se encontraban radicadas la mayoría de las cuentas que se habrían utilizado para concretar las maniobras investigadas en la presente pesquisa, no hace más que reforzar la hipótesis delictiva que se propone en estas actuaciones.

**16°)** Que, en consecuencia, al menos en el estado actual del proceso, los elementos de convicción recopilados justifican los autos de procesamiento recurridos. La fundamentación de ese auto, aunque imprescindible, basta con que sea somera (conf. artículo 308 del Código Procesal Penal de la Nación). Sólo supone una estimación de la responsabilidad del imputado que no requiere más sustanciación que haberlo escuchado y evacuado brevemente las citas útiles que hubiera hecho (conf. artículos 294, 304 y 306 del código citado) y no excluye la que puede corresponder a otras personas ni obsta a que posteriormente se puedan incorporar nuevos elementos que la desvirtúen ya que no es definitiva ni vinculante. El mismo juez puede revocarla posteriormente y el defensor tendrá oportunidad de pronunciarse si el fiscal requiere la elevación a juicio (conf. artículos 311 y 349 del mismo código).



Que los elementos de juicio hasta ahora recopilados y mencionados por el juez en su resolución, dan respaldo a la determinación adoptada y, en consecuencia, justifican por el momento las ordenes de procesamiento recurridas.

17º) Que, con relación a las críticas de la defensa oficial de Segundo Pantaleón CORDOBA referidas a que debe aplicarse a su defendido la redacción del antiguo art. 278 del C.P. por resultar dicha redacción más benigna, las mismas no han sido sustentadas en argumento alguno.

En ese sentido, no se han dado razones que sustenten dicho planteo y tampoco explica esa defensa en qué consiste esa supuesta benignidad. Por el contrario el planteo se ha limitado a la afirmación de que *“Resulta indudable que la anterior redacción de la ley...reviste calidad de ley penal más benigna.”*, por lo que no se advierte un agravio que haya sido sustentado de forma autónoma. Tampoco se ha expedido el magistrado de la instancia anterior sobre la posible aplicación ultractiva de la norma señalada, por lo que tampoco corresponde a este Tribunal que se expida sobre esa cuestión, la que eventualmente deberá ser planteada por las vías procesales pertinentes, con el fin de garantizar el principio constitucional de la doble instancia judicial.

Por lo demás, debe recordarse que en esta etapa del proceso la ley procesal solo requiere estimar la existencia de un hecho delictuoso y la participación culpable del imputado, cualquiera fuese el encuadre legal (conf. artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación). Esa misma ley contempla la oportunidad en la cual se debe establecer la calificación del hecho que haya sido objeto de la instrucción, así como la precisión circunstanciada del suceso con miras a la elevación a juicio. Es lo que debe hacerse, después de dictado el auto de procesamiento y una vez completa la instrucción (conf. artículos 346 y 347 del código citado).





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 1076/2015/14/CA4

**18°)** Que, respecto del agravio introducido por la defensa oficial de Segundo Pantaleón CORDOBA en cuanto a la afectación de principio de inocencia de su defendido por entender que no es admisible la prueba indiciaria para acreditar el delito precedente del lavado de activos, debe señalarse que *“...La acreditación razonable del delito antecedente a los efectos de la sentencia por lavado de activos debe ser acreditada por indicios, presunciones o cualquier otro elemento probatorio también sujetos a la sana crítica racional (conf. analóg. Art. 3, ap. 3 de la Convención ONU de Viena de 1988 sobre Tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y Art. 398, párr. 2 del CPP). Se trata en definitiva de la prueba razonable de una actividad ilícita con categoría de delito o infracción de naturaleza penal con capacidad para poner en riesgo el bien jurídico del citado Art. 303 del CP. Tal acreditación debe partir de los datos disponibles, cualesquiera éstos sean (conf. Tribunal Supremo Español, sentencias 1704/01 y 928/06 en ocasión de tratar la norma del entonces vigente Art. 301 del CP Español, de similar estructura al Art. 303 del CP).”* (confr. CPE 1502/2011/TO1 (2518), resuelta el 3/9/15 por el T.O.P.E. N° 2, en el marco de las actuaciones caratuladas “CORDOBA, SEGUNDO PANTALEON s/LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO”).

Por lo tanto, el agravio del apelante en ese sentido no puede tener una recepción favorable.

**19°)** Que, respecto del agravio introducido también por la defensa oficial de Segundo Pantaleón CORDOBA en relación a que el magistrado de la instancia previa no tuvo en cuenta elementos probatorios incorporados a la presente causa, corresponde recordar que *“...por la normativa procesal vigente, en la etapa de instrucción los jueces no están obligados a valorar todos y cada uno de los elementos de prueba incorporados al legajo, ni a pronunciarse sobre*



*todos los descargos efectuados por el imputado, ni a producir todas las medidas de prueba solicitadas por aquél, sino sólo las que estimara pertinentes a fin de ‘...comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad (art. 193 del C.P.P.N.)’ (confr. Reg. CPE 1913/2019/5/CA, de fecha 18/02/2020, Reg. Interno 46/2020 de esta Sala “A”; el destacado corresponde a la presente). Asimismo, se ha expresado que “...si por el desarrollo posterior de la instrucción se favoreciera la situación de los imputados, por la ley de rito se prevé la posibilidad de revocar de oficio, o de reformar, el auto de procesamiento (art. 311 del C.P.P.N.)...” (confr. Reg. CPE 1913/2019/5/CA, de fecha 18/02/2020, Reg. Interno 46/2020 de esta Sala “A”).*

**20°)** Que en cuanto a los importes por los que se ordena embargar los bienes de los procesados, con los elementos de juicio hasta ahora reunidos, debe entenderse ajustado a lo que indica el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación. Las objeciones a la determinación de esos montos pueden ser ponderadas con la sustanciación que requiere la ley procesal civil, conforme está previsto en los artículos 520 del Código Procesal Penal de la Nación y 203 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

**21°)** Que, con relación a la transferencia efectuada por NASATE RESOURCES INC., por el monto de u\$s 359.700, que surge del cuadro que se encuentra agregado en el apartado 1 del considerando 10°) de la resolución apelada y lo señalado por el magistrado de la instancia previa en el apartado d) del considerando 25°) de esa misma resolución, resulta oportuno encomendar al señor juez “a quo” que certifique el estado de las actuaciones señaladas por dicho magistrado en el apartado indicado precedentemente, a los fines que estime corresponder.





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 1076/2015/14/CA4

22º) Que, en relación al auto de sobreseimiento dictado respecto de Ariel Sebastián PELLADO y de Marcelo Fabián PELLADO, con relación a los sucesos referidos por los apartados 1, 2, 3, 9 y 10 del considerando 10º de la resolución apelada, los que habrían consistido en la transferencia de importantes sumas de dinero por parte de los nombrados a cuentas relacionadas con los imputados Segundo Pantaleón CORDOBA y Miguel Ángel PETRIZAN, debe señalarse que el sobreseimiento es la resolución jurisdiccional por la cual se concluye el proceso definitiva e irrevocablemente con relación al imputado en cuyo favor se dicta, y encuentra fundamento en las causales taxativamente previstas por la ley. Por consiguiente, para el dictado de un auto de sobreseimiento con aquellos alcances es necesaria la certeza del juzgador sobre la configuración de alguna de las causales previstas por el artículo 336 del C.P.P.N. (confr. C.F.C.P., Sala 1, “NAVARRO, Juan Manuel y otros s/ recurso de casación, rta. el 23/05/01; Sala III, “SAKSIDA, Walter Raúl s/ recurso de casación”, rta. el 18/2/00; Sala IV, “SANTOS, Enrique José s/ recurso de casación” del 22/11/99).

23º) Que, en el caso, contrariamente a lo estimado por el tribunal de la instancia anterior, se advierte que las constancias incorporadas al legajo no resultan, en principio, suficientes para considerar acreditado el estado de certeza requerido por el art. 336 del C.P.P.N. sobre la constitución de alguno de los supuestos previstos por aquella norma respecto de los imputados con relación a los sucesos referidos por el considerando que antecede.

24º) Que, en efecto, por el examen de las constancias de la causa se advierte que, al menos por el momento, no puede descartarse, como el juzgado “a quo” hizo, la configuración del tipo penal previsto por el art. 303 inc. 1 del Código Penal, agravado por lo



previsto en el inc. 2 punto “a” del mismo artículo, respecto de los más de U\$S 200.000 que habrían transferido los hermanos PELLADO, por intermedio de la sociedad CEDARLAKE S.A. en la mayoría de esas transferencias, a la cuenta de la sociedad NASATE RESOURCES INC, integrada por Segundo Pantaleón CORDOBA y Hugo Mariano RODRIGUEZ; los U\$S 100.000 y los U\$S 40.000 que habrían transferido por intermedio de las firmas CEDARLAKE S.A. y KILCON INTERNATIONAL S.A., respectivamente, a la cuenta N° 206.672 del HSBC Banck Uruguay abierta a nombre de Segundo Pantaleón CORDOBA; los U\$S 245.000 que habrían transferido también por intermedio de la firma CEDARLAKE S.A. a la cuenta N° 3070264 del HSBC Banck Uruguay abierta también a nombre de Segundo Pantaleón CORDOBA; y de los U\$S 295.000 que habrían transferido por intermedio de la firma CEDARLAKE S.A. a las cuentas que el imputado Miguel Ángel PETRIZAN tendría abiertas a su nombre en los Estado Unidos de América.

En este sentido, conforme lo expresado tanto por el fiscal de la instancia anterior como por el fiscal que actúa ante esta instancia de apelación, se advierte que los elementos en los que se sostiene el auto de sobreseimiento dispuesto respecto de Ariel Sebastián PELLADO y de Marcelo Fabián PELLADO, consisten exclusivamente en la falta de denuncia del Fisco Nacional en materia tributaria, el blanqueo al que se habría acogido Ariel Sebastián PELLADO en el marco de lo previsto por la Ley 27.260 mediante el cual habría exteriorizado bienes en el exterior y, por último, la verosimilitud de los descargos de los nombrados imputados con respecto a que el origen de los fondos provendrían de su actividad comercial lícita. Esos elementos no tendrían la entidad necesaria para determinar de forma concluyente el origen lícito de las sumas de dinero en cuestión.

25°) Que, en efecto, el propio magistrado de la instancia anterior reconoce en la resolución apelada que “...no escapa a





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 1076/2015/14/CA4

*tribunal que de las diferentes constancias aportadas por la A.F.I.P., respecto de los imputados Ariel PELLADO y Marcelo PELLADO, nada se logró obtener respecto a las sociedades KILCON y CEDERLAKE, constituidas en el Uruguay, es decir, de los documentos y archivos aportados surge que los nombrados no habrían declarado en tiempo y forma aquéllas ante el Fisco Nacional, circunstancia que podría verse como la posible comisión de un delito en materia tributaria...”, concluyendo que “...pero que se desvanece con el informe de ese organismo de control que expresa la inexistencia de denuncia contra los imputados en ese sentido.” (confr. fs. 107 vta. de las presentes actuaciones).*

La conclusión a la que arriba el magistrado de la instancia anterior se advierte cuanto menos prematura ya que, como se expresara anteriormente, la ausencia de denuncia penal por parte del organismo recaudador no brinda la certeza necesaria para determinar el origen, lícito o no, del dinero de que se trata.

Por el contrario, el hecho de que la actividad que los hermanos PELLADO realizaron por intermedio de las mencionadas sociedades, relacionada con Segundo Pantaleón CORDOBA y con Miguel Ángel PETRIZAN, se haya efectuado omitiendo su declaración ante la A.F.I.P. sustenta la hipótesis del fiscal de la instancia anterior y justifica las medidas propuestas por dicho Ministerio en cuanto a que debe darse intervención a dicho organismo recaudador con el fin de descartar una posible maniobra de evasión tributaria.

En ese sentido se ha sostenido en un caso análogo al presente que “...sin perjuicio de los datos aportados por la Administración Federal de Ingresos Público...en los informes que obran en el expediente, no hay constancias de que el organismo recaudador haya realizado fiscalizaciones ...y toda vez que lo que pretende la agente fiscal es determinar si ese dinero proviene de



*evasiones tributarias como el delito precedente al lavado de activos, resultaría determinante que se llevaran a cabo esas medidas..., al tratarse de un delito en el que se suelen utilizar estructuras empresariales que demuestran solvencia fiscal y actividades comerciales lícitas, el caso amerita a seguir adelante con la pesquisa a fin de que se pueda adquirir la certeza necesaria para el dictado de un auto de sobreseimiento.” (confr. el voto del Dr. Juan Carlos BONZON en CPE 489/2014/CA3, resuelta el 21/09/18, Reg. Interno 776/18 de esta Sala “A”).*

26°) Que, por lo demás, la falta de certeza a la cual se aludió por el considerando 23°) de la presente no solo se verifica con motivo de lo expuesto por los considerandos 24°) y 25°) de esta resolución sino que se desprende de la omisión de realizar otras medidas de prueba vinculadas los sucesos de que se trata. En efecto, se advierte que a los fines de la investigación podría resultar pertinente y útil la realización de la medida solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal en la instancia anterior por el recurso de apelación interpuesto, referida a la necesidad de la intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos a los fines de determinar una posible maniobra de evasión tributaria por parte de los imputados, lo que podría sustentar la hipótesis.

27°) Que, por todo lo expresado, se advierte que el auto de sobreseimiento de Ariel Sebastián PELLADO y de Marcelo Fabián PELLADO dictado por el juzgado “a quo” respecto de los hechos aludidos por los apartados 1, 2, 3, 9 y 10 del considerando 10° de la resolución apelada, no resulta ajustado a derecho y a las constancias de la causa, por lo que corresponde revocar el mismo.

Por ello, **SE RESUELVE:**

**I. TENER POR DESISTIDO** el recurso de apelación interpuesto por el representante de la parte querellante respecto del







Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 1076/2015/14/CA4

sobreseimiento de Rocío Macarena CORDOBA y de María Laura SUELDO. **CON COSTAS** (art. 454 del C.P.P.N.).

**II. CONFIRMAR** la resolución recurrida por la cual se dictó el auto de procesamiento y embargo de bienes respecto de Segundo Pantaleón CORDOBA y de Hugo Mariano RODRIGUEZ. **CON COSTAS** (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.)

**III. REVOCAR** la resolución recurrida por la cual se dispuso el sobreseimiento de Ariel Sebastián PELLADO y de Marcelo Fabián PELLADO. **SIN COSTAS** (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.).

**IV. ENCOMENDAR** al señor juez “*a quo*” en los términos señalados por el considerando 21º) de la presente resolución.

Regístrese, notifíquese y devuélvase junto con los autos principales y la documentación reservada por Secretaría.

Se deja constancia de que firman únicamente los suscriptos en virtud de lo establecido por el artículo 24 bis del Código Procesal Penal de la Nación incorporado por la ley 27.384.

MARTIN IRURZUN  
JUEZ DE CAMARA

JUAN CARLOS BONZON  
JUEZ DE CAMARA

ANTE MI

JULIAN O. CALZADA  
SECRETARIO DE CAMARA

